

Entre las expectativas y la desmoralización: la Cámara Argentina de la Construcción ante la última dictadura militar

*Between Expectations and Demoralization:
The Argentinian Chamber of Construction Facing the Last Military Dictatorship*

Luján Menazziⁱ
lmnazzi@yahoo.com.ar

Resumen

Este trabajo busca analizar los posicionamientos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) respecto a la última dictadura militar argentina. El golpe militar de 1976 fue recibido con expectativa y esperanza por parte de la CAC, máxima representante de las empresas de la construcción en ese período y una de las entidades patronales más poderosas del país. Sin embargo, a medida que avanzó el “Proceso”, el vínculo entre la CAC y el gobierno militar se volvió cada vez más conflictivo. En esta línea, interesa indagar el modo en que la Cámara fue posicionándose y negociando frente a la batería de políticas de la última dictadura, y en qué medida estos posicionamientos dieron cuenta de las demandas y necesidades más generales del sector durante el período.

Palabras clave: CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN; DICTADURA; INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Abstract

This article analyzes the link between the Argentinian Chamber of Construction (CAC) and Argentina’s last military dictatorship. The military coup of 1976 was received with expectation by the CAC -the most important representative of construction companies in this period and one of the country’s most powerful business organizations-. Nevertheless, as the dictatorship progressed, the relationship became more problematic and contradictory. The article considers the way in which the Chamber took position and negotiated with the set of policies carried out by the Dictatorship and inquires if these positions faithfully represented the general interests and demands of the sector during that period.

Key words: ARGENTINIAN CHAMBER OF CONSTRUCTION; DICTATORSHIP; CONSTRUCTION INDUSTRY.

Recibido: 18 de diciembre de 2015.

Aprobado: 20 de noviembre de 2016.

ⁱ Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Este trabajo se basa parcialmente en una ponencia realizada en el marco de las X Jornadas de Estudios Sociales de la Economía del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES). Agradezco los detallados comentarios realizados por Lucas Iramain, Alejandro Gaggero, Marina Dossi y Gustavo Motta a la ponencia que dio origen a este artículo.

Introducción: articulando interrogantes

El análisis del período de la última dictadura militar resulta sumamente complejo. Existe cierto consenso en interpretar a la dictadura como un parteaguas en numerosos sentidos, en consonancia con la propia autodenominación del régimen como “Proceso de Reorganización Nacional”. Ciertas cuestiones han sido particularmente debatidas aunque no saldadas como las reformas económicas, los objetivos del régimen, el terrorismo de Estado, entre otras. En términos generales, el período es caracterizado como un momento de profundas reestructuraciones económicas. Hubo cambios en el rol planificador propio del Estado de bienestar, sus modos de intervenir y la articulación de lo público y lo privado. Sin embargo, tal como señalan numerosos autores, más que un corte absoluto con las orientaciones previas existió una compleja articulación entre continuidades y rupturas. Así, resulta útil retomar perspectivas como las de Hugo Quiroga (2005), Hugo Vezzetti (2002) y Vicente Palermo y Marcos Novaro (2002) quienes, además de “pensar a la dictadura militar en clave política”, hacen énfasis en colocar a la dictadura en la trama de sentido de la historia argentina, y no como algo desvinculado de ésta.¹ En términos de Vezzetti, la última dictadura fue tanto una irrupción como un desenlace, y, siguiendo a Quiroga, el “Proceso” adquiere sentido en la propia lógica del sistema político argentino. También en el área económica existen análisis que apuntan a identificar las líneas de continuidad y ruptura de las políticas económicas de la dictadura. Así, Ana Castellani (2009), Alfredo Pucciarelli (2004) y Alberto Müller (2001) observan tanto un quiebre profundo como líneas de continuidad en las políticas económicas y una articulación tensa de liberalismo y corporativismo.

Siguiendo a Juan Suriano (2005), resulta fundamental pensar en términos de dictadura cívico-militar, en que jugó un rol esencial el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil, en particular el de las asociaciones empresariales. En términos de Mario Lattuada “las decisiones que adoptan los gobiernos sobre las formas de organización y distribución de los recursos en los sistemas capitalistas, [...] suelen tener como referentes privilegiados los intereses de los empresarios, dado su rol estratégico en la inversión y el empleo”.² En el marco de esa preocupación, este trabajo retoma planteos ligados al análisis de las relaciones empresarios-Estado. En las décadas del ochenta y del noventa en América Latina se multiplicaron los estudios sobre estos vínculos desde distintas perspectivas analíticas.³ En el caso argentino, también se puede observar una proliferación de estos estudios a partir de la década del ochenta, cuando la preocupación por la estabilidad del sistema democrático puso en la mira a los grupos de presión.⁴ Estos trabajos aportan elementos clave para comprender el comportamiento empresario y los modos en que estos actores se articularon con el Estado en períodos recientes.

Existen diversas perspectivas respecto a los vínculos entre Estado y empresarios en el período dictatorial. Por un lado, hay quienes afirman que “políticamente, muchos de esos

¹ Canelo (2008), p. 16.

² Lattuada (2006), p. 18.

³ Matilde Luna Ledesma y Cristina Puga Espinosa (2007) aluden a un período de auge de los estudios sobre empresarios a partir de 1975 que ellas atribuyen, en parte, a un cuestionamiento del paradigma marxista predominante previamente, que identificaba burguesía con Estado.

⁴ Se destacan al respecto los trabajos de Palomino (1988), Schvarzer e Itzcovitz (1989), Schvarzer (1990), Lattuada (1990), Ostiguy (1990), Sidicaro (1991) y Birle (1997) sobre el comportamiento de los grupos y asociaciones empresariales y, más recientemente, los trabajos de Beltrán (2007), Castellani (2009), Dossi (2009) y Rougier (2011) sobre empresas, grupos, sectores o agrupaciones empresariales.

grandes grupos económicos tuvieron un acceso privilegiado al gobierno militar”.⁵ La coincidencia ideológica de muchas agrupaciones patronales con los postulados del régimen, el acceso a algunos puestos de decisión por parte de empresarios de diversas ramas y la cruzada contra la subversión y la restauración del orden supusieron un fuerte apoyo inicial de las asociaciones más importantes a la dictadura.⁶ Algunos investigadores indagaron la conformación de ámbitos privilegiados de acumulación en diversos sectores, entre el Estado y actores privados.⁷ Sin embargo se señalaba también cierta impermeabilidad y desconfianza frente a los empresarios por parte de sectores del gobierno militar, la influencia limitada que éstos pudieron ejercer en las decisiones gubernamentales, y los efectos muy heterogéneos de la política económica sobre la industria, dependiendo del sector y del tamaño de la empresa.⁸ Entre la batería de intervenciones heterogéneas y a veces contradictorias, la última dictadura militar desarrolló mucha obra pública, a pesar de sostener una prédica contraria al gasto público.⁹ Al mismo tiempo, se multiplicaron las modificaciones a las reglamentaciones de la construcción privada realizadas por municipalidades, provincias y por el Gobierno Nacional a través de diversas reparticiones.¹⁰ Esta articulación entre intensa obra pública, restricciones a la construcción privada a través de regulaciones del uso del suelo, y reorientaciones económicas más generales del período probablemente implicó una rearticulación en el entramado de actores público-privados que intervenían en la construcción.

En este marco de reestructuraciones económicas y reformulaciones de las relaciones entre diversos actores, cabe preguntarse por el vínculo entre empresarios de la construcción y Estado. ¿En qué medida había coincidencia ideológica entre ambos? ¿Cuáles eran las opiniones de este sector respecto a las orientaciones de la dictadura? ¿Hubo reformulaciones en los posicionamientos y vínculos a lo largo del período?

A partir de estos interrogantes, se busca analizar los posicionamientos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) frente a la última dictadura militar argentina. El golpe

⁵ Ostiguy (1990), p. 334.

⁶ Así lo afirma Birle (1997) al analizar el posicionamiento de las principales asociaciones empresarias, con excepción de la Confederación General Económica, que fue disuelta, y la Unión Industrial Argentina, que en un comienzo fue intervenida.

⁷ Castellani (2009) e Iramain (2010).

⁸ Sidicaro (1991) y Beltrán (2007). Acuña (1988), por ejemplo, señala que las posibilidades de influir sobre las decisiones gubernamentales que los afectaban fueron mucho menores que en dictaduras previas. Castellani (2007) da cuenta del desempeño diferencial que tuvieron las empresas y grupos económicos de acuerdo a su articulación con el Estado.

⁹ El caso de la ciudad de Buenos Aires es paradigmático en este sentido, algunas de las intervenciones más destacadas fueron la construcción de parques, plazas, autopistas, escuelas, grandes equipamientos y ensanches de avenidas (Menazzi, 2012 y 2013). A su vez, a nivel nacional, se desarrollaron grandes obras especialmente del rubro energético que supusieron un aumento de la inversión en el gasto público en construcciones entre 1977 y 1979 (Castellani, 2007).

¹⁰ En términos de reglamentaciones, el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Buenos Aires de 1977 implicó severas restricciones a la construcción, limitando alturas e intensidad del uso del suelo. Esto supuso perjuicios en particular a las pequeñas constructoras, debido a las características exigidas para construir y conseguir “premios” de altura. Es decir, el nuevo Código implicaba que en un mismo terreno se pudieran construir menor cantidad de viviendas que con las reglamentaciones previas, lo cual encarecía la unidad de vivienda. A su vez, para ser autorizado a construir edificios más altos, se requería sumar varias parcelas, lo cual suponía un capital inicial más importante, favoreciendo a las empresas más grandes. Por otra parte, la falta de crédito hipotecario y la reducción del poder adquisitivo de amplios sectores de la población implicaba una menor capacidad para invertir en viviendas. Esto también golpeó particularmente a las pequeñas empresas, que desarrollaban este tipo de emprendimientos y que no tenían capacidad técnica ni financiera de acceder a las obras públicas. Los lineamientos del Código fueron replicados por numerosas municipalidades de la provincia de Buenos Aires y el resto del país.

militar de 1976 fue recibido con expectativa por parte de la CAC, máxima representante de las empresas de la construcción en ese período y una de las entidades patronales más poderosas del país. Sin embargo, tal como analizaremos, la Cámara sostuvo un discurso crecientemente crítico respecto al “Proceso” que no se condecía estrictamente con el desempeño de la industria de la construcción. Sostenemos que una posible explicación se vincula con cierto desajuste entre las características de la dirigencia, las estrategias políticas de la CAC y las necesidades del sector. En este sentido, el perfil social e ideológico de los directivos suponen planteos con cierta inercia crítica, más ligados a las luchas históricas de la entidad y los posicionamientos políticos de sus dirigentes que a las demandas sectoriales en la coyuntura de la dictadura. De hecho, tal como analizaremos en el artículo, muchos de los posicionamientos económicos generales de la CAC colisionaban con necesidades concretas de la industria de la construcción.

Para este trabajo se analizó principalmente la publicación societaria de la CAC *Informaciones de la Construcción*.¹¹ Se trata de una publicación semanal que detalla todas las gestiones y actividades de la entidad: la Convención Anual de la Industria de la Construcción (que se realizaba todos los años, rotando de ciudad cada vez), las convenciones anuales de abogados y asesores económicos, las celebraciones del día de la construcción en todas las delegaciones, los almuerzos con “invitado de honor” (generalmente un funcionario o dirigente de alto rango), las declaraciones, conferencias de prensa, discursos, solicitudes, notas a funcionarios, diagnósticos, proyectos de ley, jurisprudencia, índice de costos, convenios de trabajo, entrevistas, actas de sesiones internas e intervenciones públicas y privadas de la entidad y sus miembros. Los destinatarios exclusivos eran los socios de la CAC. La publicación resulta muy rica y apropiada para comprender los posicionamientos de la entidad a lo largo del período y su accionar respecto al gobierno militar en tanto la revista funcionaba como la voz oficial, una vidriera en que mostrarle a sus asociados todas las diligencias, la efectividad, las ideas y, en ocasiones, las frustraciones a las que se enfrentaba la CAC.¹²

¹¹ Las publicaciones de la Cámara comenzaron en 1939, con un Boletín de aparición mensual que difundía leyes de obra pública, laborales y otras informaciones pertinentes para la industria. A partir de 1945 el Boletín se transformó en la revista *Construcciones*, en la que además de lo que se venía publicando se agregaban comentarios técnicos de grandes obras y muchas ilustraciones. A partir de 1957 se comenzó a publicar además *Informaciones de la Construcción*, primero de modo quincenal y luego semanal. A estas publicaciones periódicas se sumaron algunas publicaciones especiales referidas a temas que coyunturalmente preocuparon a la Cámara a lo largo de los años, como la serie *La industria de la construcción y la economía nacional*, abocada a distintas cuestiones técnicas, legales y financieras de la industria (CAC, 1986a) y las publicaciones por aniversarios de la entidad. En este trabajo se consideraron estas otras publicaciones de la CAC, sin embargo, tienen un contenido más técnico, de difusión de tecnologías, obras o asesoramiento legal y contable.

¹² A lo largo del período, la publicación fue variando su formato. Inicialmente, sostuvo un promedio de entre 20 y 25 páginas, aunque ciertos números anuales superaban las 100 páginas en tanto reproducían en separatas los resultados de las convenciones anuales, proyectos de ley, diagnósticos exhaustivos sobre las distintas ramas de la industria, etc. A partir de 1980 la revista fue creciendo, redondeando un promedio de 30 páginas cada número. Desde septiembre de 1976 la revista incorporó de modo intermitente una nota editorial sin firma de una carilla, en que se comentaba, criticaba o reflexionaba sobre la situación del país y distintas iniciativas, leyes, fallos judiciales, políticas, etcétera. La editorial se incorporó de modo definitivo en todos los números hacia 1977. El resto del contenido iba variando y no estaba organizado en secciones. Exceptuando las notas de opinión, los artículos aparecían sin firma.

Algunas especificidades de la industria de la construcción y de la Cámara Argentina de la Construcción

La construcción constituye una rama fundamental para la economía argentina.¹³ Históricamente conservó una participación de entre el 5% y el 7% del PBI, salvo contadas excepciones (CAC, 2006). El hecho de ser una industria mano de obra intensiva y con fuerte impacto en el resto de la economía la constituyó en uno de los mecanismos más utilizados para reactivar la economía. Sin embargo, es una rama muy heterogénea ya que

[...] dentro del sector conviven un gran número de pequeñas empresas, dedicadas ya sea a la construcción de viviendas unifamiliares o a actividades específicas subcontratadas por otras, con grandes organizaciones que encarar obras de envergadura; estas últimas cubren desde los edificios de vivienda colectiva hasta las instalaciones industriales, caminos, puentes, represas hidroeléctricas, etc. (Schvarzer e Itscovitz, 1989, pp. 2-3).

La demanda estatal jugó siempre un rol central en esta industria. El período estudiado arrancó con una participación estatal del 36% y llegó a superar el 40% al final de la etapa procesista (Lanusse, 1981b).¹⁴ Además de la participación por medio de inversión directa, las regulaciones urbanas y regionales, los reglamentos en las licitaciones y las políticas económicas más generales tienen marcada incidencia sobre su desempeño. Por otra parte, los mercados de esta rama están sumamente segmentados en subsectores específicos, que difieren respecto a la tecnología, características de las obras y tipo de comitentes. Esto hace que los mecanismos de formación de precios y acumulación de capital también difieran.¹⁵ Esto, a su vez, trae consecuencias sobre el tipo de vínculos que se establece entre los empresarios y las reparticiones públicas encargadas de licitar esas obras, siendo, en el caso de algunos submercados un universo muy restringido de agentes que pertenecen a una misma comunidad profesional (Marques, 1997).

Durante el período que analizamos, la inversión privada bruta en construcciones, fue creciendo con algunos altibajos entre 1976 y 1980, y se mantuvo ligeramente superior a lo invertido en la primera parte de la década del setenta, mientras que la inversión pública creció de modo mucho más significativo en el mismo período, para descender abruptamente a partir de 1980. El consumo de acero para hormigón armado y cemento, que constituye otro indicador para dar cuenta del derrotero de la industria también creció durante la primera etapa del “Proceso”, hasta 1980.¹⁶ Estos datos dan cuenta globalmente de un buen desempeño del

¹³ A nivel regional, existen numerosos trabajos que abordan específicamente la industria de la construcción y su vínculo con el Estado (Ziccardi, 1991; Schteingart, 1979; Marques, 1999). En Argentina, distintos autores se enfocaron en diversos aspectos de esta industria: Vitelli (1976 y 1978) se focalizó en sus características económicas, técnicas y reconfiguraciones; Schvarzer e Itscovitz (1989) en su organización gremial; Yujnovsky y Clichevsky (1979) en su sector más concentrado; Clichevsky (1996) en las regulaciones y excepciones en la construcción privada; Yujnovsky (1984) en los productores de vivienda y sus vínculos con el Estado; Iramain (2013), en la creación de ámbitos privilegiados de acumulación en el sector vial; Serafinoff (2012) en las concesiones de autopistas; Fidel y Fernández (2000) en la producción de vivienda en los noventa; Socoloff (2013) trabajó sobre un grupo económico y Raspall (2014) sobre pequeños desarrolladores.

¹⁴ Es importante aclarar que se trata de cifras elaboradas por la Cámara Argentina de la Construcción. Para 1989, Schvarzer e Itscovitz (1989) calculan una demanda estatal de participación de un 50% de la contratación de la rama. También, en algunas alocuciones la CAC mencionaba otras cifras de participación estatal, del 50% o más durante el período.

¹⁵ Schvarzer e Itscovitz, (1989) y Serafinoff (2012).

¹⁶ CAC (1986b) y Castellani (2007).

sector durante los primeros cuatro años de la dictadura. A partir de 1980 todos estos indicadores comienzan a descender.¹⁷

La CAC se conformó en 1936, en respuesta a una huelga de obreros de la construcción. Esta institución logró adjudicarse la representación de la industria sin competencia hasta 1985.¹⁸ En este sentido, en tanto logró erigirse por mucho tiempo como única voz de la industria de la construcción, la Cámara representaba, junto con la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Comercio una de las cinco entidades empresarias más importantes del país en el período abordado: “Esas cinco [...] representan la gama básica de los distintos sectores de la vida económica (el agro, la industria, la construcción, el comercio y el mercado de capitales) y exhiben una tradición de colaboración y acciones conjuntas que ha fortalecido su presencia en la Argentina moderna”.¹⁹

El rol central de la CAC entre las entidades empresarias no se debe solo a la importancia de la propia industria de la construcción, sino a que la Cámara, de modo autónomo y/o en coordinación con otras agrupaciones, se convirtió en privilegiada interlocutora de los sucesivos gobiernos, incidiendo en las decisiones que se tomaran sobre el sector y en las orientaciones económicas y sociales más generales.²⁰ En este sentido, integró agrupaciones empresarias que tuvieron fuerte presencia pública y roles claves en distintas coyunturas: conformó la Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL) en 1958, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) en 1975 y el “Grupo de los Ocho” en 1987, protagonizando de este modo fuertes cruzadas políticas.²¹ En sus festejos anuales por el “día de la Construcción”, solía contar con la presencia del presidente de turno.

La CAC, como varias entidades empresarias, se caracterizó por una gran continuidad de un mismo grupo dirigente, asociado a grandes empresas. Tal como señala Schvarzer:

En todas las entidades se pueden detectar grupos de control formados por escaso número de personas que permanecen largamente en sus cargos y aseguran la mayoría de los puestos en los organismos de

¹⁷ El análisis del desempeño del sector amerita una profundización que excede los objetivos de este artículo, en tanto más allá de los indicadores globales, correspondería analizar separadamente la inversión pública y privada, el desarrollo de los distintos rubros como el energético, caminos, vivienda, grandes obras de infraestructura que fue muy dispar en el período, así como el desempeño de las empresas de acuerdo a sus dimensiones.

¹⁸ Esto no significa que no haya otros actores relevantes en el sector de la construcción. Al contrario, se trata de un universo en el que conviven muchos actores, que se alían o se enfrentan de acuerdo a coyunturas específicas, aunque suelen tener intereses comunes. En algunos casos, la CAC comparte dirigentes, eventos e intereses con otras agrupaciones.

¹⁹ Schvarzer (1990), p. 6.

²⁰ Esto se percibe con claridad en la interacción que siempre sostuvo con las diversas reparticiones públicas, que le realizan consultas y la participan de proyectos de ley, resoluciones, etc. Otra muestra de su rol de interlocutor, es la construcción de un número índice del costo de la construcción que publica desde 1948. Ese número índice es tomado como referencia en detrimento de aquel publicado por el INDEC, considerado “obsoleto”.

²¹ Más allá de que el rol de estas agrupaciones empresarias fue diverso en cada coyuntura, la participación de la CAC en todos los casos resulta elocuente respecto a su voluntad y capacidad de intervenir públicamente en asociación con las corporaciones más importantes. ACIEL surgió en oposición a la Confederación General Económica (CGE), agrupando las posturas liberales de las grandes entidades empresarias, contrarias a la intervención estatal. APEGE tuvo un perfil ideológico similar, tal como analizaremos en el próximo apartado, mientras que el Grupo de los Ocho (conformado por la CAC, Sociedad Rural Argentina, Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio, Cámara Argentina de Comercio, Asociación de Bancos de la República Argentina, Unión Argentina de la Construcción, Asociación de Bancos Argentinos) tenía un perfil diverso, en tanto conjugaba en su interior tendencias heterogéneas, incorporando entidades y actores económicos con otro perfil (Ostiguy, 1990).

decisión. Los principales dirigentes están relacionados con empresas de gran dimensión y normalmente reflejan intereses económicos muy diversificados. Esos dirigentes lograron notable participación en sucesivos gobiernos.²²

Como ejemplo más destacado de este factor, la presidencia de la CAC estuvo a lo largo de cuarenta años a cargo del mismo dirigente, el Ing. Cesar Polledo. Durante el período, los cuadros dirigentes estuvieron ocupados por presidentes, dueños o altos dirigentes de las empresas más importantes de aquel momento: Roggio, EACA, Ecofisa, Aragón, Petersen, Thiele y Cruz, Polledo, INDECO, DESACI, Crivelli, Lanusse y Vialco. En muchas oportunidades, estas empresas actuaban en conjunto frente a grandes licitaciones, conformando agrupaciones transitorias para encarar grandes obras. Los dirigentes iban rotando en las funciones (presidente, vicepresidente, tesorero, vocales) de modo que la dirección de la entidad se mantuvo en las mismas manos a lo largo del tiempo. A esto se agrega la existencia de vínculos sociales y familiares que homogeneizaban aún más al grupo dirigente.

Otro factor que merece destacarse acerca de los directivos de la CAC es que no solo participaban de constructoras, sino que también participaban de empresas de otros rubros, en particular, bancos e inmobiliarias, aunque también actividades agropecuarias. En este sentido, los vínculos estrechos no solo se daban entre dirigentes de la CAC, sino también con directores de otras grandes empresas del período con los que tenían intereses en común.

La CAC estaba en ese período integrada por empresas constructoras en un 80% (socios plenarios, un poco más de 1.400 empresas en el período), siendo el resto de los socios contratistas y proveedores de materiales (casi 400 empresas). Sus estatutos fueron, hasta 1974, bastante conservadores: solo podían ser socios plenarios las empresas de determinado capital (eliminando de este modo a las pequeñas empresas) y solo podían ser dirigentes aquellas empresas asociadas antes de 1946, lo cual reducía enormemente el universo de candidatos. Esta restricción se flexibilizó en 1974, en que se solicitaban 15 años de antigüedad para ejercer cargos directivos y se permitía que algunos socios más recientes ocupen espacios restringidos del directorio. Más allá de la flexibilización de 1974 que permitió el ingreso de pequeñas empresas y amplió el universo de posibles candidatos, hubo continuidad de nombres en el grupo dirigente y las mismas grandes empresas siguieron teniendo el control de la entidad a tal punto que desde su fundación hasta 1983 se presentó una sola lista de unidad a las elecciones. Estos factores hacían que no hubiera prácticamente discusión interna.

La CAC surgió en la Ciudad de Buenos Aires y paulatinamente se fueron fundando las delegaciones regionales (una por provincia o en algunos casos en que había más de una ciudad importante, dos por provincia). Las delegaciones tenían cierta autonomía, realizaban festejos y actos propios y establecían relaciones con los gobiernos locales, pero también mantenían un estrecho vínculo con la dirigencia nacional.

Los posicionamientos políticos de la CAC se caracterizaron por un discurso liberal y antiestatista, en concordancia con las otras grandes entidades empresarias argentinas con las que frecuentemente alineó posiciones. Esto supuso enfrentamientos con el peronismo y fuertes sintonías con los gobiernos militares, que incluían la participación de miembros de la CAC en funciones públicas.²³

²² Schvarzer (1990), p. 11.

²³ Así, el Presidente de la CAC entre 1936 y 1976, Cesar Polledo, afirmaba “comprendamos que el país no se arregla con cambiar de hombres, lo que requiere es cambiar la mentalidad estatizante y populista por una men-

Como otras entidades, la CAC solía enunciar sus intereses y opiniones como si estuvieran identificados con los intereses de la nación. Según este discurso, el estado de la economía en general y de la construcción en particular eran prácticamente una misma cosa. Así, retomando un dicho francés, afirmaban: “Cuando la construcción va bien, todo bien”. De este modo, ubicaban a la industria de la construcción en el epicentro de la economía, afirmando también que se trataba de la “industria de industrias” y de la “más nacional de las industrias”. Además de resaltar su condición clave en la economía, enfatizaban que se trataba de una industria noble y útil, por el tipo de producto que provee. En este sentido, el lema de la Cámara es “la construcción, industria del Bienestar Humano”. En muchas de estas caracterizaciones, se esconden ciertas amenazas veladas. Así, el dicho francés es invertido y en épocas negativas solían afirmar que si la construcción va mal, todo va mal. También, enfatizaban que un mal desempeño de la construcción supone elevada desocupación, con el consiguiente malestar social que ello puede significar.

La previa al golpe: APEGE, paro empresario

Tal como dijéramos en el apartado anterior, la CAC sostuvo históricamente un discurso contrario al intervencionismo estatal, a las empresas del Estado y al empoderamiento de los sindicatos.²⁴ En 1975, por ende, su discurso era duramente crítico con las autoridades. Se hablaba de “caos”, “dramática situación” y “grave crisis para la industria de la construcción”.

En este marco, había una ebullición importante al interior de la entidad, que se materializó en asambleas de emergencia y declaraciones públicas afirmando que la gravedad de la crisis del país era tal que la situación específica del sector ya perdía relevancia. En este sentido, se advierte la vocación de la CAC por intervenir en la política nacional, más allá de sus opiniones y demandas sectoriales.

En paralelo, se alió con otras entidades para rechazar ciertas normativas en el marco de un Comité de Acción Empresaria (por ejemplo, para negarse a pagar un aporte al Fondo Sindical). En agosto de 1975 terminó de conformar APEGE en alianza con las más importantes organizaciones empresarias.²⁵ La CAC fue anfitriona de las reuniones, y su presidente de ese entonces, Cesar Polledo, fue elegido miembro del secretariado ejecutivo. La APEGE se declaró en estado de alerta y movilización, arengando a los empresarios: “llegó la hora de definirse y actuar”. Se constituyó así en una usina de desgaste para el gobierno, lanzando durísimas críticas, panoramas de catástrofe y, en su punto álgido, lanzando el *lockout* patronal de febrero de 1976. Muchos de sus integrantes se incorporaron luego al gobierno militar y,

talidad de libertad económica, sinónimo de libertad individual, que siga los lineamientos que en su época hicieron de este país un gran país” (Polledo, 1976, p. 4). Este tipo de comentarios, reforzando la importancia de la libertad individual, la libre empresa y un Estado que se limitara a regular se reiteraban permanentemente en las editoriales y en los comentarios sobre las diversas iniciativas del período.

²⁴ En 1975 identificaba como los mayores males del momento la “gravísima crisis política, económica, social y moral, la falta de seguridad física y jurídica, el intervencionismo estatal, la burocratización creciente, la excesiva influencia de una conducción sindical” (CAC, 1975, p. 1). Luego del golpe, la prédica contraria al intervencionismo estatal se acentuó, identificando como principal problema económico las empresas del Estado: “No exageramos al decir que, desde hace años, las empresas del Estado constituyen el punto más crítico de la economía argentina” (CAC, 1977, p. 3)

²⁵ APEGE estuvo compuesto por más de cincuenta entidades gremiales empresarias. Su mesa directiva estaba integrada por Cesar Polledo (CAC), Jorge Aguado (Confederaciones Rurales Argentinas), Armando Braun (Cámara Argentina de Comercio), Federico Peña (Cámara de Sociedades Anónimas), Celedonio Pereda (Sociedad Rural Argentina) y Jorge Sabaté (Unión Comercial Argentina).

tiempo después de asumido éste, la APEGE se disolvió, puesto que dio sus objetivos por cumplidos.

Si el tono de las solicitadas de la CAC era duro, el de APEGE lo era muchísimo más, en tanto planteaba una prédica beligerante. Lo interesante es que la CAC, en paralelo, seguía negociando con diversas reparticiones estatales todo tipo de demandas, acuerdos y rectificaciones. De hecho, agradecían muchas veces el reconocimiento que se les hacía a sus solicitudes indicando, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo Nacional “fue sensible a sus reclamos” o que ciertas reparticiones mostraron “mucho disposición al diálogo”.

El golpe: acompañando al gobierno militar

“Hoy, aquí, estoy en familia”²⁶

A partir del golpe, los puestos que resultaban clave para la actividad fueron ocupados por funcionarios de ideología afín y con excelente vínculo con las entidades empresarias. José Martínez de Hoz ocupó el Ministerio de Economía, el Ing. Federico Camba, con experiencia en funciones públicas, en consultoría y dirección de proyectos quedó a cargo de la Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas (SETOP) y el Ing. Batrosse, con extensa actividad empresarial, como subsecretario de Obras Públicas. En la provincia de Santa Fe, el presidente de la CAC de esa delegación pasó a ser ministro de Obras Públicas, en el caso de la provincia de Buenos Aires, quien ocupó ese cargo fue el Ing. Pablo Gorostiaga, dueño de EACA, Empresa Argentina de Cemento Armado, adjudicataria de importantísimas obras del período e integrante muy activo del Centro Argentino de Ingenieros, del Jockey Club y de la propia CAC. En la mayor parte de los casos, existía mucha familiaridad con los funcionarios ya que parte de ellos provenían del universo privado.

Esta relación estrecha era reforzada con todo tipo de gestos y se manifestaba como una visión compartida, en la que la experiencia empresarial venía a ilustrar y guiar el camino a la gestión pública. Así, el plan de licitaciones de Vialidad Nacional para el segundo semestre de 1976 fue anunciado en el almuerzo de camaradería de la Asociación Argentina de Carreteras, entidad muy vinculada a la CAC.²⁷ En este marco, el director de Vialidad relató que su pertenencia institucional era la Asociación Argentina de Carreteras y que: “Hoy, por uno de esos avatares de la vida, me toca a mí, quien de una u otra forma siempre estuve ligado a esta institución, rendir a ustedes mi examen como responsable de la conducción de la vialidad del país”.²⁸ Este tipo de afirmaciones se repetía con frecuencia. Los flamantes funcionarios reiteraban su condición de empresarios y destacaban lo coyuntural de su cargo público, enfatizando, además, que dentro del Estado, pretendían cumplir con los mandatos empresarios.²⁹

²⁶ Moia (1977), subsecretario de Obras Públicas de Entre Ríos.

²⁷ En ese momento, el Presidente de la Asociación Argentina de Carreteras, Alesso, era vocal de la CAC. Poco después ocuparía el cargo de vicepresidente de la Cámara.

²⁸ Carmona (1976), p. 3.

²⁹ Así, el subsecretario de Obras Públicas de Entre Ríos, Angel Luis Moia, afirmaba: “Hoy aquí me encuentro trayendo la palabra oficial, pero no puedo despojarme de lo que llevo en lo más profundo de mí; y que hasta hace un poco más de tres meses desempeñaba a través de la presidencia de la Cooperativa de Constructores y la Secretaría de la Cámara Argentina de la Construcción: mi lugar en el quehacer de la construcción. [...] Esta tarea de dieciocho años me obligó hoy más que nunca en esta tarea oficial que hoy desempeño, que todo lo que hasta ayer esperé y deseé como empresario de parte del Estado, pueda en la medida de lo posible hacerlo realidad” (Moia, 1977, p. 15).

Camba, secretario de Obras Públicas, se presentaba como amigo de Polledo antes que funcionario y afirmaba: “Yo pienso que si la prensa es el cuarto poder, la Cámara Argentina de la Construcción es el quinto”.³⁰ En esta línea, señalaba en tono cómico las estrategias que utilizaba Polledo para presionar a los funcionarios públicos, a fuerza de conferencias de prensa, asambleas extraordinarias y discursos encendidos:

Habla con el nuevo funcionario, [...] le explica puntualmente como todo funcionario que no sigue sus consejos termina inevitablemente en la renuncia a su función, le ofrece apoyo, proyectos, bibliografía, proyectos de leyes y decretos. [Si el] funcionario, indignado por esta intromisión totalmente desconsiderada, se pone a la defensiva y no acepta la propuesta, Polledo despliega mil recursos [...] llama a Asamblea Extraordinarias, reuniones de prensa, lo apostrofa, hace una historia de todos sus desaciertos, denuncia sus dislates [...]. Si el funcionario acepta y ofrece, en busca de paz, que algún miembro de la CAC integre alguna Comisión, ya al instante están las huestes de don César prestas mañana tarde y noche, vigilan cuanto se escribe, no permiten que nada se pase en limpio sin el visto bueno [...] Y cuando el pobre responsable comunica en reunión de prensa el fruto de sus desvelos, el dictamen, el decreto, la ley o el fallo, entonces don César observa y consumadamente sabe que, aunque el dictamen esté escrito en las máquinas del Ministerio, la esencia, el espíritu y la inspiración son suyos.³¹

La Cámara logró durante los primeros meses reunirse con todas las autoridades que le resultaban de su incumbencia, incluido el ministro de Economía. El diálogo era fluido y las consultas permanentes con la enorme mayoría de las reparticiones, exceptuando la Secretaría de Urbanismo, con cuyo responsable, el Arq. Vázquez Llona (quien también dirigía el Banco Hipotecario) tuvieron fortísimos cruces. No es un dato menor que Vázquez Llona tuvo que abandonar su cargo en 1979, rompiendo con la estabilidad que caracterizó a varios gabinetes ministeriales de la gestión Videla.³²

Las demandas principales de la CAC se pueden dividir en dos niveles. Por un lado, las posturas mencionadas previamente acerca de la orientación del país en términos más generales: orientación liberal, disminuir la injerencia estatal, respetar la libre empresa, la propiedad privada, abrir las fronteras a inversiones extranjeras, restringir los “beneficios” sindicales, etcétera. Se trata de postulados que sostuvo desde su creación en adelante sin grandes modificaciones y muy alineados con el discurso de la gestión económica del “Proceso”. Por otra parte, la CAC sostuvo demandas sectoriales que sí fueron variando a lo largo del tiempo, de acuerdo al interlocutor y coyuntura económica de turno. En el período que nos aboca, las demandas se vinculaban con la falta de reconocimiento de variaciones de costos en la obra pública (dada la sostenida inflación), el cumplimiento de planes de vivienda u obra pública iniciados (que en ocasiones se encontraban desfinanciados o frenados), el sostenimiento de la inversión en obra pública y del crédito hipotecario, la sanción de una Ley de Obra Pública que ordenara y actualizara el tema a nivel nacional, la creación de un Ministerio de Obra Pública. Como veremos a continuación, muchos de estos reclamos fueron abordados tempranamente por el “Proceso”.

³⁰ Camba (1976), p. 15.

³¹ *Ibidem*, p. 16.

³² El caso resulta interesante en tanto da cuenta del modo en que la CAC se manejaba con aquellos funcionarios con los que tenían desavenencias. Debido al conflicto que tuvieron con Vázquez Llona, la CAC llamó a conferencia de prensa denunciando la situación que consideraban injusta y el accionar del funcionario. En paralelo, tenían entrevistas con el ministro de Bienestar, superior directo de Vázquez Llona. En este sentido, se ve en acción lo descrito en la cita del Ing. Camba.

*Medidas auspiciosas: “Este presente preñado de expectativas esperanzadoras”*³³

La reacción de la CAC frente al golpe fue moderada en sus publicaciones oficiales. Si bien no realizó grandes declaraciones públicas, sí pidió a las empresas asociadas que no paralizaran obras “como patriótica contribución a la gestión”. Es interesante que aquí se destaque (en una versión modificada), la capacidad de invertir o no invertir, señalada por Claus Offe (1975) como la principal fuente de influencia política empresarial, por sobre la acción colectiva. Sin embargo, en este caso se da de modo articulado. La decisión de sostener una inversión, más allá de que no esté dando ganancias, fue una decisión mediada por la agrupación empresarial con miras a influir políticamente. En este sentido, cobran relevancia las orientaciones políticas de la CAC y su incidencia sobre las decisiones empresarias.

En los primeros tiempos, la Cámara estuvo dispuesta a apoyar al gobierno, aún en medidas que iban en contra de sus propios intereses. En tanto había un acuerdo respecto a las orientaciones y políticas económicas más generales, la Cámara enunciaba que estaba dispuesta a suspender sus demandas y reclamos. Así, ante la suspensión de obras, el presidente de la CAC afirmaba que “hay que entender que frente al actual momento del país es necesario rever un poco los proyectos [...] La cámara quiere acompañar al gobierno en su esfuerzo para evitar la inflación”.³⁴ O, en apoyo a los anuncios de Martínez de Hoz, afirmaban: “La Cámara coloca el interés del país y las condiciones de su futuro por encima del muy respetable interés de aquellos a quienes representa”.³⁵ De modo complementario, los funcionarios agradecían la comprensión de los empresarios ante la situación y las muestras de paciencia, que se materializaban en no producir despidos, pese al freno inicial en la obra pública.

A pesar de estas afirmaciones que planteaban una situación negativa para la construcción, hubo numerosas señales auspiciosas para la CAC durante el primer año del “Proceso”. Por un lado, una serie de reglamentaciones vinieron a intentar solucionar los problemas que traían las variaciones de costos en el marco de la obra pública y las deudas contraídas con las empresas (se trata en particular de la resolución 365/76 de la SETOP y los Decretos 2874 y 2875).

Otra de las iniciativas que había sido demandada históricamente por la CAC y que se concretó en el “Proceso” fue la Ley de Normalización de las Locaciones Urbanas. Esta ley ponía fin a más de tres décadas de protección del mercado de alquileres.³⁶ Para la entidad, la intervención estatal en el mercado de alquileres había sido la causante de la paralización de la construcción de viviendas, puesto que desestimulaba la construcción de unidades para alquiler. La normalización sería acompañada posteriormente, hacia 1978, con otra norma que daba beneficios impositivos a la construcción de este tipo de viviendas.

Si bien fue posterior, las modificaciones al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) que, entre muchas otras cuestiones aumentaban el aporte patronal del 2,5% al 5% sobre las

³³ Polledo (1976).

³⁴ Marghetti (1976), p. 32.

³⁵ CAC (1976a), p. 3.

³⁶ Desde 1943, el precio de los alquileres venía siendo regulado por el Estado. Esta regulación volvía poco rentable la construcción de este tipo de viviendas. La Ley de Normalización indicaba la liberación de los alquileres, cuyo precio sería establecido por el libre juego del mercado. En términos de Oszlak (1991), esta decisión no solo tuvo el impacto previsto en forma directa respecto a la expulsión de los inquilinos, sino que tuvo un enorme impacto simbólico para los simpatizantes de la dictadura en términos de generar una sensación de “vuelta al orden”.

remuneraciones a cargo del empleador, también representaron una medida festejada por la CAC. De hecho, la medida fue presentada como un éxito propio puesto que había sido propuesta en el marco de una Convención de la entidad en 1976.³⁷ También, el relanzamiento de Cédulas Hipotecarias por parte del Banco Hipotecario Nacional fue bien recibido.

El comienzo de la discusión acerca de una Ley de Obra Pública que ordenara, homogenizara y actualizara el tema fue muy festejado por la CAC y tuvo activa participación en todas las instancias. También la Ley de Inversiones Extranjeras fue celebrada por la Cámara. Asimismo, si bien un poco posteriores en el tiempo, las Jornadas de Obra Pública que se instauraron anualmente a partir de 1978 a instancias de la SETOP se convirtieron en un espacio de diálogo y debate público-privado muy valorado.

Por otro lado, por más que no figuren muchas referencias en las publicaciones oficiales de la CAC, se estaban desarrollando una serie de iniciativas que tendrían mucho impacto en cuanto a la producción de obra pública. Por un lado, todas las obras ligadas al Mundial de Fútbol de 1978 (refacción y construcción de estadios, accesos viales, ampliación y construcción de aeropuertos, hoteles, caminos), en segundo término, la finalización de muchas grandes obras comprometidas previamente, en tercer lugar, la sanción del nuevo Código de Planeamiento Urbano, que rápidamente tendría fuerte impacto, ya que promovía la construcción de nueve autopistas en la ciudad de Buenos Aires, además de cambiar los usos del suelo (lo cual generó un breve *boom* de permisos antes de que se implementara la nueva reglamentación).

Además, el vínculo con algunas reparticiones (en particular, la SETOP) era muy valorado, en tanto estableció una forma de trabajo que incorporaba permanentemente la opinión de la CAC. Por su parte, Camba realizaba a fines de 1976 anuncios auspiciosos que daban cuenta de una fuerte voluntad de realizar obra y expandir las empresas estatales a su cargo.

Primeros planteos y vínculos estrechos

A pesar de la afinidad ideológica, del estrecho vínculo con muchas de las autoridades y de una gran cantidad de iniciativas reglamentarias que respondían a viejos pedidos de la CAC, ciertas muestras de disconformidad comenzaron a manifestarse tempranamente. Ya a mediados de 1977 aludían a una industria que se encontraba en “un estado de creciente paralización” debido a la decisión gubernamental de no adjudicar nuevas obras, contratos o licitaciones, y de reducir las inversiones públicas como forma de combatir la inflación. Recordemos que el desempeño del sector fue positivo hasta 1980, de modo que había cierta incongruencia entre el tono crítico de la CAC y los indicadores de la construcción.

Ante esta situación, no todas las delegaciones provinciales tenían el mismo vínculo con sus respectivos gobiernos y con la situación económica. En algunos casos el discurso era muy duro, mucho más que la línea general que sostenía la dirigencia nacional de la CAC.

³⁷ Esta iniciativa resulta de particular interés en tanto da cuenta de los intereses divergentes entre la CAC y otras entidades empresarias. El aumento del aporte patronal perjudicaba en bloque a los empresarios, exceptuando a los de la construcción que sacarían beneficio del aumento de fondos del FONAVI. En este sentido, como trabajaremos más adelante, muchas veces los enunciados liberales y de economía ortodoxa con los que criticaban al Estado en alianza con el resto de las entidades, no resultaban muy congruentes con sus posturas en iniciativas concretas hacia el sector.

Mientras que en otros casos el discurso era francamente halagüeño y satisfecho con la gestión. Se destacaban, en este sentido, los discursos de Córdoba y Mendoza, que al ser sedes del Mundial de Fútbol obtuvieron bastantes obras y beneficios.

A pesar de la batería de reglamentaciones muy acordes a las posturas y demandas históricamente sostenidas por la CAC y del buen desempeño del sector, en todos los casos, fueron señalando limitaciones y medias tintas que no terminaban de satisfacer a las aspiraciones de los empresarios. El tema de las variaciones de costos y precios y su insuficiente reconocimiento fue algo que se mantuvo como una de las principales quejas a lo largo de todo el período. Respecto a la Normalización de las Locaciones Urbanas, consideraron insuficiente las garantías para que la intervención estatal nunca se vuelva a repetir. La desgravación de viviendas en alquiler tuvo una reglamentación que les pareció atentaba contra el espíritu de la norma de modo tal que la volvía inutilizable. La Ley de Obra Pública quedó trabada por desacuerdos entre ministerios. El reclamo por la sanción de la ley nunca fue abandonado por la CAC. A su vez, el aumento de fondos para el FONAVI no tuvo mucha vida puesto que poco tiempo después suprimieron los aportes patronales, afirmando que los recursos del organismo provendrían del Tesoro Nacional y/o de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Por último, la Ley de Inversiones Extranjeras fue duramente criticada desde el primer momento por algunos “vicios estatizantes”. Afirmaban que parecía que entre la sanción de la ley y su reglamentación “hubiera mediado algo así como un arrepentimiento”. Manifestaban preocupación por sospechar que en el Estado pervivían posturas estatistas:

[...] nos preguntamos si la tarea de reconstrucción emprendida debe hacerse con los que, seguramente, con la mejor de las intenciones, [...] pregonaron la necesidad de intensificar el intervencionismo estatal, la necesidad de un Estado “rico” y poderoso [...] Entendemos que es absolutamente urgente sanear nuestra burocracia en donde aún permanecen refugiadas esas ideologías.³⁸

La cita es muy ilustrativa, y esta preocupación se reitera respecto a diversas iniciativas. Este tipo de posturas contradictorias en los gabinetes ministeriales o entre ministerios eran particularmente denunciadas y criticadas por la CAC, constituyendo una de las cuestiones que generaba más desconfianza respecto al gobierno dictatorial.

Al margen de las críticas, es importante destacar que había grandes complicidades respecto a ciertas cuestiones ligadas a orientaciones y obras públicas controvertidas para los actores de la construcción. El tema de las autopistas urbanas, por ejemplo, generó enormes controversias. La Sociedad Central de Arquitectos, el Centro Argentino de Ingenieros y la Sociedad Argentina de Planificación manifestaron fortísimos desacuerdos con su proyección. La CAC no se hizo eco de ninguna de las críticas y ni siquiera hizo mucha mención al plan de autopistas, que por su trascendencia y dimensiones merecía ser analizado. Únicamente transcribieron una defensa a ultranza de las autopistas realizada por la Asociación Argentina de Carreteras. Resulta sumamente elocuente este silencio, a la luz de los ganadores de las licitaciones de las Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: por el lado argentino, Polledo, empresa de quien presidió la CAC por 40 años, y EACA, propiedad de Pablo Gorostiaga, ministro de Obra Pública de la Provincia de Buenos Aires y activo miembro de la Cámara.³⁹ También, en el caso de las obras del Mundial, hubo mucha controversia. El manejo discrecional de los

³⁸ CAC (1977), p. 3.

³⁹ Por la parte española, participaban las empresas Huarte y Vyesa.

fondos, la realización de obras consideradas innecesarias y la adjudicación directa, entre otras cuestiones, fueron temas criticados por otras organizaciones del universo de la construcción, varias reparticiones públicas y por la prensa nacional. Nada de esto fue mencionado por la CAC que, al contrario, tuvo siempre una postura celebratoria. Al analizar las empresas beneficiadas con obras, tenemos, por ejemplo, que la empresa Roggio se encargaría de realizar el estadio monumental de Córdoba, junto con autopistas e infraestructura de comunicación como el edificio de Argentina Televisora Color (ATC). A partir de 1980, Marcelo Roggio, quien venía participando desde siempre en la entidad, se convirtió en presidente de la CAC. Crivelli, otro alto dirigente de la institución, construyó el estadio de Mar del Plata. También, la Municipalidad de Buenos Aires realizó numerosas obras (escuelas, parques, refacción de hospitales, ensanche de avenidas, etcétera) en las que participaron altos dirigentes de la entidad: Ecofisa, empresa integrada por Bibiloni, vicepresidente en varias oportunidades de la CAC, la ya mencionada EACA, Indeco -empresa a la que pertenecía Lanusse, presidente de la Cámara a partir de 1981-, Aragón, de Nestor Alesso, quien fuera vicepresidente de la CAC y presidente de la Asociación Argentina de Carreteras, Petersen, Thiele y Cruz que presidía Guillermo Vila, quien fuera tesorero de la CAC.

Resulta bastante lógico que los directivos de la Cámara fueran beneficiarios de las obras más importantes, en tanto, tal como mencionamos, eran propietarios o co-propietarios de las firmas más grandes. En este sentido, es que los reclamos de la CAC muchas veces deben leerse como reclamos del sector más concentrado de la industria de la construcción y no del conjunto de la industria, tema central sobre el que volveremos más adelante.

Ahora bien, más allá de que comenzaban a manifestarse las disconformidades en algunas cuestiones, y que con el correr del tiempo se irían profundizando este tipo de comentarios, el apoyo al “Proceso”, a los principios económicos que éste enunciaba y a la política más general de defensa a ultranza de la “guerra contra la subversión” fue sostenido desde el inicio y hasta el final del período. La Cámara colaboró defendiendo la imagen del “Proceso” a nivel internacional, reproduciendo el comunicado “La verdadera Argentina también es noticia” que buscaba divulgar los logros frente a la “campaña internacional de desprestigio contra el país”. Difundieron el halagüeño comunicado a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción y a todas las Cámaras de la Construcción de América Latina.

Recesión, crisis y fidelidad

Las manifestaciones de disconformidad fueron aumentando gradualmente. Los principales motivos de queja de la CAC respecto al sector eran la escasa inversión en obra pública, la creciente presencia de empresas extranjeras y llamados a licitaciones internacionales, las variaciones de costos no reconocidas suficientemente, las demoras en la sanción de la Ley de Obra Pública, problemas con el financiamiento, el posible desmantelamiento del FONAVI, la falta de un Ministerio de Obras Públicas y la carencia de un Registro de Contratistas serio. En términos más generales, y como causantes vinculados a los problemas del sector, mencionaban el exceso de gasto público, el sobredimensionamiento del Estado y la falta de aplicación del “principio de subsidiaridad”. Estas demandas y definiciones eran reiteradas con mayor asiduidad y, a medida que pasaba el tiempo, el diagnóstico de la situación se volvía cada vez más oscuro.

La asunción presidencial del Teniente General Roberto Viola trajo ciertas expectativas y buenos augurios, en tanto se creó un Ministerio de Obras Públicas y se nombró en puestos importantes a integrantes de la CAC. En particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Banco Hipotecario quedaron a cargo del Ing. Guillermo Vila, activo dirigente de la Cámara, con experiencia previa en función pública y en empresas de primera línea: Petersen, Thiele y Cruz.⁴⁰

Sin embargo, a partir de mediados de 1981 el tono se volvió francamente dramático, se comenzó a hablar de una crisis sin precedentes en el sector y hubo mucha más salida a los medios de tirada masiva, con constantes apariciones de los directivos en la prensa describiendo la crítica situación de la construcción. Se declaró además Asamblea en Estado de Sesión Permanente y se solicitó urgente audiencia al presidente, la Junta Militar y los gobernadores. En todos los medios se denunció una capacidad ociosa de alrededor del 50%.

Como era de esperar, obtuvieron rápida respuesta de las autoridades, reuniéndose con todos los responsables en varias oportunidades (desde el presidente Viola hasta los gobernadores, ministros, intendentes y secretarios de todas las provincias). Se constituyeron comisiones de trabajo público-privadas para avanzar con las situaciones que les resultaban más problemáticas y se lanzaron algunas medidas de aliento a la industria, como una reactivación del Banco Hipotecario para dar préstamos hipotecarios y para obras de desarrollo urbano.

Aun así, la CAC manifestaba que la situación seguía empeorando: “No recordamos un período tan crítico para nuestra industria, próxima al colapso [...] que se agrava día a día, con más de cuatrocientos mil desocupados, con una capacidad ociosa de nuestras empresas del 60% en rápido incremento”.⁴¹ Las cifras que la Cámara denunciaba en el sector, de desocupación, ociosidad y paralización iban aumentando a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, la CAC no informaba el modo en que construía sus propias cifras de actividad, aun cuando le solicitaban precisiones. Este modo de operar le otorgaba gran discrecionalidad en sus diagnósticos y demandas. Además, resulta curioso que, en retrospectiva, no se diera el mismo diagnóstico de la situación. Así, en 1986 hablaba del período de 1976 de este modo: “las cifras mencionadas revelan el crecimiento sostenido de la industria, lo que será aún más evidente en los años siguientes, para arribar en 1980 a los valores históricamente más altos”. Asimismo, califican al período en términos de “pujanza constructiva”.⁴² No deja de ser sugestiva la utilización de distintos indicadores, argumentos y diagnóstico de la situación, según el período e interlocutor.

La CAC siguió sosteniendo un discurso más crítico respecto a la situación, mencionando cifras y diagnósticos cada vez más oscuros. En alianza con otras entidades del sector, conformó una Comisión Intersectorial que se fue reuniendo con autoridades y proponiendo

⁴⁰ Sidicaro (1991) sostiene: “El formato Viola presentó como característica la corporativización empresaria del Estado. Este proyecto se operacionalizó desarticulando el Ministerio de Economía, que en los cuatro años anteriores había sido una de las piezas clave del intento de cambio social autoritario. En su lugar se crearon un conjunto de ministerios (agricultura, industria y comercio), y al frente de cada uno de ellos se puso a representantes de los distintos sectores empresarios que durante el gobierno de Videla habían criticado la política seguida por Martínez de Hoz” (Sidicaro, 1991, p. 77). Posteriormente, con la asunción presidencial del Teniente General Leopoldo Galtieri, también asumieron varios integrantes de la CAC.

⁴¹ Lanusse (1981a), p. 7.

⁴² CAC (1986a), pp. 69 y 79.

una serie de medidas para el corto, mediano y largo plazo.⁴³ En 1982 realizaron la declaración de Mar del Plata, donde retomaron de modo textual las muy críticas apreciaciones realizadas en la declaración de San Martín de los Andes, de 1975: “Ante la gravedad de la crisis que está viviendo el país, cumpliendo con un imperativo de nuestra conciencia de argentinos, hemos debido admitir que nuestros problemas específicos palidecen frente a los de orden general, que amenazan provocar la quiebra moral, política y económica de la Nación”.⁴⁴

La transcripción literal de la misma declaración realizada en 1975 buscaba ser un durísimo golpe para el gobierno dictatorial. A modo de explicación, señalaban que la situación crítica y la profunda disconformidad respecto a las orientaciones del gobierno volvían a ser válidas para el gobierno del “Proceso” en que la CAC había puesto tantas esperanzas.

Más allá de este quiebre durante la última etapa del gobierno militar se pueden destacar algunas cuestiones sobre los posicionamientos de la CAC. En primer término, siempre, aún hacia el final del régimen, se manifestó fiel a los principios del “Proceso”. Así, en 1982 afirmaba: “Nuestra cámara ha apoyado el Proceso de Reconstrucción Nacional, aún antes que se concretara, y continúa haciéndolo, consustanciada con los principios filosóficos que lo inspiraron”.⁴⁵ La orientación económica liberal que se predicaba, el restablecimiento del orden y la represión a opositores y sindicatos fueron principios siempre apoyados y valorados positivamente por la CAC. Si bien se denunciaba la situación del sector como dramática, no se acusaba con dureza a los gobernantes. Se comentaba la falta de determinación para avanzar con el achicamiento del Estado, se insistía con que no se cumplía con el “principio de subsidiaridad” tan pregonado, etcétera. En todo caso, el gobierno era criticado por cierta tibieza y debilidad y por no cumplir con los compromisos anunciados. El tono era, de modo evidente, diametralmente distinto a aquél utilizado en 1975, en donde se denunciaba desgobierno y corrupción en las más altas esferas.

Otra cuestión relevante se vincula con ciertas incongruencias en el discurso de la CAC. Si bien siempre insistieron con la prédica liberal, aperturista y anti-estatista, a tono con el resto de las grandes organizaciones empresarias, al mismo tiempo requerían y bregaban, en políticas puntuales, por un Estado muy presente. Se aplaudían aumentos de impuesto para el FONAVI que claramente iban en contra de una matriz liberal, se criticaba la presencia de empresas extranjeras y licitaciones internacionales cuando al mismo tiempo reproban el proteccionismo, la falta de apertura y la Ley de Inversiones Extranjeras por tibia y estatista. Requerían achicamiento del gasto público, al tiempo que demandaban inversión en obra pública. En cierto modo, muchos de los reclamos más generales acerca de la orientación económica deseable iban en detrimento de los propios intereses del sector, cuestión que retomaremos a continuación.

Algunas reflexiones finales

Tal como se desarrolló en el artículo, los vínculos entre la dictadura y la CAC fueron estrechos a lo largo de todo el período. Había fuertes coincidencias ideológicas con los postulados

⁴³ La Comisión estaba conformada por la Asociación de Empresarios de la Vivienda, la CAC, la Cámara de la Vivienda Económica de la República Argentina, la Federación Argentina de la Construcción, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Consultores, el Centro Argentino de Ingenieros, la Federación de Asociaciones de Arquitectos y la Unión Argentina de Asociaciones de Ingenieros.

⁴⁴ CAC (1982), p. 1.

⁴⁵ Lanusse (1981a), p. 6.

filosóficos del gobierno dictatorial, vínculo cercano con los responsables de las reparticiones que más involucraban al sector e, incluso, aporte de cuadros dirigentes. Había frecuentes audiencias, se establecían comisiones de trabajo con participación de actores públicos y privados e instancias de encuentro para discutir los problemas del sector. En este sentido, se detectó considerable permeabilidad de las áreas gubernamentales ligadas a la construcción, a diferencia de otras áreas caracterizadas por mayor impermeabilidad frente a las demandas sectoriales.⁴⁶

Aun así, la CAC sostuvo una prédica que fue crecientemente crítica respecto a la situación, aunque no respecto a los responsables políticos de la misma. Más allá de que muchas de sus demandas fueron satisfechas, tanto en términos de normativas como en términos de realización de obra pública, estas críticas fueron creciendo hasta alcanzar muy tempranamente tonos de catástrofe que no tenían un correlato directo con el desempeño del sector. En este sentido, cabe interrogarse por los motivos de la desmoralización que sufrió la CAC respecto al “Proceso” y el discurso crecientemente crítico, más allá del vínculo estrecho y la satisfacción de muchas de sus demandas.⁴⁷

Tal como mencionáramos previamente, las demandas de la CAC podrían agruparse en dos niveles. Por un lado, aquellas más generales respecto a la orientación de la economía y el rol del Estado; por el otro, las demandas sectoriales, que respondían a necesidades del sector en coyunturas específicas. Las demandas específicas del sector solían tener llegada y respuesta satisfactoria sobre todo durante los primeros años del “Proceso”. A su vez, en el nivel más general de posicionamientos había fuerte comunión con los postulados de la dictadura. Sin embargo, a medida que avanzó el “Proceso” existió cada vez más una profunda decepción respecto a las orientaciones económicas generales, mucho más profunda que las disconformidades sectoriales. La falta de cumplimiento de los principios filosóficos como la “subsidiaridad”, el achicamiento del Estado y la baja del gasto público fueron el principal reclamo a lo largo de todo el período, adquiriendo tonos de tragedia. Estas desavenencias fueron lo que más hastió a la CAC respecto al “Proceso”, puesto que atribuían la creciente crisis económica a la tibieza en el cumplimiento de estos principios. En esta línea, también, la Cámara denunciaba las incoherencias internas del gobierno dictatorial y la supervivencia de sectores dentro del elenco gubernamental, contrarios a los postulados liberales. En la tensión existente dentro del gobierno entre posturas liberales y anti-estadistas y las posturas más corporativas, proclives a la presencia de un Estado fuerte, con voluntad de intervenir y consolidar el territorio nacional a partir de grandes obras, la CAC elegía acompañar a los primeros, y tener una mirada crítica sobre los segundos.

A su vez, las consecuencias de muchas de las orientaciones económicas generales que apoyaban resultaban perjudiciales para el sector. La reducción del gasto público implicaba realizar menos obras (por más que la CAC insistiera en concebir a la obra pública como inversión, deslindándola del gasto público). La apertura de la economía suponía la competencia

⁴⁶ Esto, sin embargo, no fue homogéneo. Hubo áreas con las que se sostuvieron fuertes conflictos, como la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en los primeros años del “Proceso”, y áreas que sí se mantuvieron más impermeables a las demandas empresarias, como la gestión de la Municipalidad de Buenos Aires durante la intendencia del Brigadier Osvaldo Cacciatore.

⁴⁷ Iramain analiza el caso del sector vial, señalando también este desajuste entre discurso y desempeño del sector y planteando que se trataba de una estrategia política para presionar: “trazando un panorama catastrofista como parte de su estrategia política para presionar por la obtención de mayores concesiones y privilegios” (Iramain, 2009, p. 10).

con firmas extranjeras (siempre que se abría una licitación internacional reclamaban que se debía valorar las empresas locales). La reducción del poder adquisitivo de amplios sectores de la población, consecuencia de muchas de las políticas implementadas por Martínez de Hoz que la CAC apoyaba, paralizaba el mercado inmobiliario. En este sentido, la decepción con el “Proceso” se debía tanto a lo que ellos entendían como tibieza, traición o incapacidad de lograr ejecutar los postulados liberales al pie de la letra, como por los efectos de la aplicación de esos mismos postulados.

Así, el buen vínculo entre la CAC y el gobierno militar y la presencia de varios empresarios afines en puestos de decisión no garantizaban que el sector saliera beneficiado de un modo sustancial, en tanto los efectos de la aplicación de muchos de los principios sostenidos por la entidad no resultaban convenientes para la industria de la construcción y en muchas oportunidades estos principios no podían ser aplicados completamente por las propias internas del gobierno militar. La insistencia que se observa en su discurso sobre ciertos valores de liberalismo ortodoxo antiestatista y aperturista colisionaban de modo directo con necesidades de la industria de la construcción.

Hay varios elementos a considerar para intentar comprender estas aparentes contradicciones. Tal como señalan Schvarzer e Itscovitz (1989), no hay que dar por sentado la equivalencia entre el interés del sector, el de los miembros y la estrategia política de la organización. Como vimos, los integrantes de la dirigencia se caracterizaban por una gran homogeneidad de perfiles y opiniones: pertenecientes a sectores altos y familias tradicionales, propietarios o presidentes de grandes empresas, con participación en otros sectores de la economía, extensísima permanencia en los puestos dirigenciales, un estilo personalista y poco profesionalizado que implicaba falta de discusiones internas en la entidad. En contraste, tal como describimos en el apartado sobre el sector de la construcción, se trata de un sector sumamente heterogéneo, caracterizado por la presencia de una gran cantidad de pequeñas empresas y, por otro lado, grandes empresas. En el período analizado, la dirigencia se ocupó de defender los intereses de las grandes empresas, abordando de modo tardío y menor, los intereses de las pequeñas empresas que salieron muy perjudicadas por algunas políticas.⁴⁸

Estas características de la dirigencia implican una serie de cuestiones. Por un lado, las demandas generales sostenidas parecían tener que ver con cierta perspectiva de clase y del rol y posicionamiento políticos que históricamente habían tenido los grandes empresarios más que con las necesidades intrínsecas del sector. Se trataba de dirigentes de grandes empresas que, a su vez, tenían inversiones y participación en otros sectores, como el financiero. En este sentido, la perspectiva más general sobre las orientaciones económicas no respondía estrictamente a su encolumnamiento en cierto sector de la economía. Vinculado a esto, el discurso de la CAC se caracterizó por cierta inercia crítica y conservadora que se vinculaba

⁴⁸ Esto se puede ver, por un lado, en el vínculo con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. El código de 1977 y otras normativas perjudicaron severamente a las pequeñas industrias. Sin embargo, la CAC abordó ese tema muchos años después de promulgado el código, cuando los efectos ya se habían hecho sentir. Asimismo, había una demanda permanente de controlar de modo más estricto las fronteras del sector, intentando evitar la permeabilidad. Este reclamo se daba hacia afuera, ante la presencia de empresas extranjeras, pero sobre todo hacia adentro, por la “excesiva laxitud” del Registro de Contratistas que permitía que “casi cualquiera” pudiese inscribirse. Las demandas permanentes de hacer más estrictos los requerimientos del registro y de que la CAC pudiera participar activamente en el mismo tenían que ver con intentar preservar y regular las fronteras, excluyendo de ciertas obras y beneficios a las empresas más pequeñas

estrechamente con las características de estos dirigentes. Schvarzer (1990) alude a cierta inercia institucional que articulaba la fuerte estabilidad de los dirigentes con la reiteración de las mismas propuestas, diagnósticos y soluciones posibles. En este marco, aún en contextos de profundos cambios políticos, económicos e institucionales, había mucha continuidad en los posicionamientos y cierta inelasticidad en los mismos. Evidentemente, el discurso respecto al gobierno militar fue muy diverso respecto al del gobierno precedente, en tanto se reiteraba la afinidad con los principios del “Proceso”, se agradecía la lucha contra la subversión y no se apuntaba contra las autoridades. Sin embargo, el grueso de los reclamos, los diagnósticos, estilos y planteos, presentaban más visos de continuidad que de ruptura.

En este punto resultan muy sugerentes las reflexiones de Beltrán acerca de la acción empresaria:

[...] las acciones empresariales no respondieron exclusivamente a evaluaciones de situaciones y preferencias, ni a ordenamientos de las opciones y recolección de información, sino que fueron orientadas por el lugar que ocupaban dentro del campo político, por las luchas de las que formaban parte y por su historia. En otras palabras, las acciones tuvieron más de respuesta rutinaria e irreflexiva que de un comportamiento racional y estratégico orientado por intereses económicos.⁴⁹

Esta reflexión nos resulta útil para pensar el modo en que los posicionamientos históricos de la entidad como defensora de posturas liberales junto con otras grandes entidades, el perfil de sus dirigentes, todos ellos al mando de grandes empresas, con inversiones en otros sectores y con un perfil social homogéneo, y cierta inercia en los planteos contribuyeron a la defensa o incentivación de ciertas políticas más allá de que resultaran perjudiciales para el sector.

Cabe indagar a futuro, si el quiebre de la CAC en 1985 y la conformación de la Unión Argentina de la Construcción se vincula con estas contradicciones y con la emergencia de un perfil diverso de grandes empresarios de la construcción.

Siglas utilizadas

ACIEL: Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres.

APEGE: Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias.

CAC: Cámara Argentina de la Construcción.

FONAVI: Fondo Nacional de la Vivienda.

SETOP: Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas.

Fuentes

CAC (1975), “A los empresarios del país”, *Informaciones de la Construcción*, nro. 574, 24 de diciembre, p. 1.

CAC (1976a), “La Cámara Argentina de la Construcción ante la política económica oficial” *Informaciones de la Construcción*, nro. 589, 6 de octubre, pp. 3.

CAC (1976b), “Normalización de locaciones urbanas” *Informaciones de la Construcción*, nro. 583, 25 de agosto, p. 3.

CAC (1977), “Editorial”, *Informaciones de la Construcción*, nro. 602-603, 12 de enero, p. 3.

⁴⁹ Beltrán (2007), p. 28. Si bien Beltrán analiza otro período y otros actores, sus reflexiones resultan muy iluminadoras para este trabajo.

- CAC (1980), “La Cámara Argentina de la Construcción analiza conceptos del Secretario de Obras y Servicios Públicos”, *Informaciones de la Construcción*, nro. 808, 19 de diciembre, pp. 6-8.
- CAC (1982), “Declaración de Mar del Plata”, *Informaciones de la Construcción*, nro. 895, 20 de agosto, pp. 1-3.
- CAC (1986a), *La construcción. Industria del Bienestar Humano – Cámara Argentina de la Construcción 1936-1986*, Buenos Aires.
- CAC (1986b), “Los 50 años de la Cámara Argentina de la Construcción. Reportaje al Ing. Bibiloni”, *Informaciones de la Construcción*, nro. 1063, 8 de agosto, pp. 10-13.
- CAC (2006), *Estudio de las capacidades y problemas en la industria de la construcción de infraestructuras, Informe Final*, Fondo para el Desarrollo de la Construcción, Buenos Aires.
- Camba, Federico (1976), “Discurso por el 40 aniversario de la Cámara Argentina de la Construcción y Homenaje a Cesar Polledo”, *Informaciones de la Construcción*, nro. 580, 4 de agosto, pp. 9-16.
- Carmona, Gustavo (1976), “Obras Públicas: Plan de Obras de la Dirección Nacional de Vialidad para el segundo semestre de 1976”, *Informaciones de la Construcción*, nro. 578, 21 de julio, pp. 3-4.
- Lanusse, Antonio (1981a), “Discurso por el Día de la Construcción”, *Informaciones de la Construcción*, nro. 856, 20 de noviembre, pp. 12-20.
- Lanusse, Antonio (1981b), “Expresiones del Ingeniero Lanusse sobre la crisis de la construcción”, *Informaciones de la Construcción*, nro. 844, 28 de agosto, pp. 3-16.
- Marghetti, Roberto (1976), “Declaraciones del ing. Marghetti en conferencia de prensa”, *Informaciones de la Construcción*, nro. 588, 29 de agosto, pp. 33-41.
- Moia, Angel (1977), “Los festejos en el interior del país. Discurso por el día de la construcción – Entre Ríos”, *Informaciones de la Construcción*, nro. 606, 2 de febrero, pp. 4-15.
- Polledo, Cesar (1976), “El Ingeniero Cesar M. Polledo habló en el Centro Argentino de Ingenieros sobre la evolución de la construcción”. *Informaciones de la Construcción*, nro. 571, 2 de junio, pp. 3-6.

Bibliografía

- Acuña, Carlos (1988), “Empresarios y política (Parte 1). La relación de las organizaciones empresarias con regímenes políticos en América Latina: los casos argentino y brasileño”, *Boletín Informativo Techint*, nro. 255, noviembre-diciembre, pp. 17-45.
- Beltrán, Gastón (2007), *La acción empresarial en el contexto de las reformas estructurales de las décadas de los ochenta y noventa en Argentina*, Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Birle, Peter (1997), *Los empresarios y la democracia en la Argentina. Conflictos y coincidencias*, Buenos Aires, Universidad de Belgrano.
- Canelo, Paula (2008), *El Proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone*. Buenos Aires, Prometeo libros.
- Castellani, Ana (2007), “Intervención económica estatal y transformaciones de la cúpula empresarial durante la última dictadura militar (1976-1983)”, en Clara Lido, Horacio Crespo y Pablo Yankelevich (comps.), *Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado*, México DF, El Colegio de México, pp. 131-164.
- Castellani, Ana (2009), *Estado, empresas y empresarios. La difusión de ámbitos privilegiados de acumulación en la Argentina entre 1966 y 1989*, Buenos Aires, Prometeo libros.
- Clichevsky, Nora (1996), *Política social urbana. Normativa y configuración de la ciudad*, Buenos Aires, Espacio Editores.
- Dossi, Marina (2009), “La acción colectiva de la Unión Industrial Argentina en el período 1989-2002. Un análisis desde su dinámica organizativa-institucional”, *Documento de*

- Investigación Social*, nro. 10, IDAES-UNSAM. Disponible en <http://www.unsam.edu.ar/institutos/idaes/publicaciones.asp>
- Fidel, Carlos y Graciela Fernández (2000), *La producción del medio construido en la Argentina de los 90*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.
- Iramain, Lucas (2009), “Intervención estatal y discurso empresario. Análisis de la actuación de la Dirección Nacional de Vialidad y del discurso de los empresarios de la industria de la construcción vial, en el marco del plan de obras públicas de la dictadura militar argentina 1976-1978”, ponencia presentada en el *XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología*, Buenos Aires.
- Iramain, Lucas (2010), “Intervención estatal, desempeño empresario y ámbitos privilegiados de acumulación. El caso del sector vial durante la última dictadura militar, Argentina (1976-1981)”, *H-industri@. Revista de historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina*, año 4, nro. 6, primer semestre, pp. 1-27. Disponible en <http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/439>
- Iramain, Lucas (2013), “Política económica en la dictadura. La orientación y calidad de la intervención económica del Estado en el sector vial. La actuación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) (Argentina, 1976-1981)”, *Documento de Investigación Social*, nro. 24, IDAES-UNSAM. Disponible en <http://www.unsam.edu.ar/institutos/idaes/publicaciones.asp>
- Lattuada, Mario (1990), *El Estado argentino y los intereses industriales (1983-1989)*, Buenos Aires, CLADE Informes, nro. 1
- Lattuada, Mario (2006), *Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones institucionales a fines del siglo XX*, Bernal, Universidad de Quilmes.
- Luna Ledesma, Matilde y Cristina Puga Espinosa (2007), “Los estudios sobre los empresarios y la política. Recuento histórico, líneas de investigación y perspectivas analíticas”, en Jorge Basave y Marcela Hernández (coord.), *Los estudios de empresarios y empresas. Una perspectiva internacional*, México DF, UAM-Plaza y Valdés Editores, pp. 172-209.
- Marques, Eduardo (1997), “Notas críticas a literatura sobre Estado, políticas estatales e actores políticos”, *BIB: Boletim Bibliográfico de Ciências Sociais*, nro. 43, pp. 67-102.
- Marques, Eduardo (1999), “Estado e Empreiteiras na Comunidade de Políticas Urbanas no Rio de Janeiro”, *Dados*, vol. 42, nro. 2. Disponible en: <http://ref.scielo.org/985f2g>.
- Menazzi, Luján (2012), “El Proceso en la ciudad. El caso del traslado del Mercado Nacional de Hacienda de Liniers durante la última dictadura militar argentina”, *Revista Cuaderno Urbano. Espacio, cultura, sociedad*, nro. 12, pp. 95-114. Disponible en: <http://ref.scielo.org/hxv3sn>
- Menazzi, Luján (2013), “Ciudad en dictadura. Procesos urbanos en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar (1976-1983)”, *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, vol. XVII, nro. 429. Disponible en: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-429.htm>
- Müller, Alberto (2001), “Un quiebre olvidado: la política económica de Martínez de Hoz”, *Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad*, nro. 21, pp. 1-18. Disponible en: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/ciclos/ciclos_v11_n21_02.pdf
- Offe, Claus (1975), “The Theory of Capitalist State and the Problem of Policy Formation”, en Leon Lindberg, Robert Alford, Colin Crouch y Claus Offe (eds.), *Stress and Contradictions in Modern Capitalism*, Toronto, Lexington Books, pp. 125-144.
- Ostiguy, Pierre (1990), *Los capitanes de la industria. Grandes empresarios, política y economía en la Argentina de los años 80*, Buenos Aires, Editorial Legasa.
- Oszlak, Oscar (1991), *Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano*, Buenos Aires, Cedes-Humanitas.
- Palermo, Vicente y Marcos Novaro (2002), *La dictadura militar (1976/83)*, Buenos Aires, Paidós.

- Palomino, Mirta (1988), *Tradición y poder: la Sociedad Rural Argentina (1955-1983)*, Buenos Aires, CISEA-GEL.
- Pucciarelli, Alfredo (2004), “Introducción”, en Alfredo Pucciarelli (coord.), *Empresarios tecnócratas y militares*, Buenos Aires, Siglo XXI editores.
- Quiroga, Hugo (2005), “El tiempo del Proceso”, en Juan Suriano (dir.), *Nueva historia argentina. Tomo X: Dictadura y democracia (1976-2001)*, Buenos Aires, Sudamericana, pp. 33-86.
- Raspall, Tomás (2014), *El rol de los actores en la configuración de la oferta de vivienda nueva en la ciudad de Buenos Aires durante los primeros años de la posconvertibilidad. El caso del barrio de Caballito, 2003-2008*, Tesis de Maestría en Sociología Económica, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
- Rougier, Marcelo (2011), *Estado y empresarios de la industria del aluminio en la Argentina: el caso Aluar*, Bernal, Universidad de Quilmes.
- Schteingart, Marta (1979), “Sector inmobiliario capitalista y formas de apropiación del suelo urbano: el caso de México”, *Demografía y Sociedad*, vol. 13, nro. 4, pp. 449-466. Disponible en: http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/EBBMYHIM8HDUI5ALH1MS8MF3ILG58S.pdf
- Schvarzer Jorge e Victoria Itscovitz (1989), *Organizaciones corporativas del empresariado argentino. La Cámara Argentina de la Construcción (1960-1985)*, Buenos Aires, CISEA.
- Schvarzer, Jorge (1990), *Estructura y comportamiento de las grandes corporaciones empresarias argentinas (1955-1983). Un estudio “desde adentro” para explorar su relación con el sistema político*, Buenos Aires, CISEA.
- Serafinoff, Valeria (2012), “Los empresarios de la construcción: estrategias de articulación y asociación con el Estado. Un análisis a partir del mantenimiento, reparación y mejora de redes viales en Argentina”, *Realidad Económica*, nro. 266, pp. 137-157.
- Sidicaro, Ricardo (1991), “De la dictadura a la democracia: formatos de relación entre Estado y empresarios en la Argentina de la década del 80”, *Debate Laboral: Revista Americana e Italiana de Derecho del Trabajo*, nro. 8-9, año 1991, pp. 73-88.
- Socoloff, Ivana (2013), *Reflexiones en torno a las relaciones entre empresa, Estado y ciudad. Un estudio a partir del caso IRSA en Buenos Aires (1991-2012)*, Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Suriano, Juan (2005), “Introducción: Una Argentina diferente”, en Juan Suriano (dir.), *Nueva historia argentina. Tomo X: Dictadura y democracia (1976-2001)*, Buenos Aires, Sudamericana, pp. 11-32.
- Vezzetti, Hugo (2002), *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI editores.
- Vitelli, Guillermo (1976), *Competencia, oligopolio y cambio tecnológico en la industria de la construcción: el caso argentino*, Buenos Aires, CEPAL. <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/9716>.
- Vitelli, Guillermo (1978), *Cambio tecnológico, estructura de mercado y ocupación en la industria de la construcción argentina*, Buenos Aires, CEPAL. Disponible en: <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/9627>.
- Yujnovsky, Oscar (1984), *Claves políticas del problema habitacional argentino 1955-1981*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.
- Yujnovsky, Oscar y Clichevsky, Nora (1978), “El sector concentrado de la construcción en la Argentina”, *Revista Latinoamericana de Planificación*, vol. XII, nro. 47-48, septiembre - diciembre, pp. 49-63.
- Ziccardi, Alicia (1991), *Las obras públicas de la Ciudad de México: política urbana e industria de la construcción, 1976-1982*, México DF, UNAM.